Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, **el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro.**

**VISTO** el expediente formado con motivo del Recurso de Revisión **04442/INFOEM/IP/RR/2023**, promovido por una persona de manera anónimaqueen lo sucesivo se denominará **LA RECURRENTE**, en contra de la respuesta emitida por el **Ayuntamiento de Toluca,** en lo sucesivo, **EL SUJETO OBLIGADO**, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**ANTECEDENTES**

**I. De la Solicitud de Información**

**1. Presentación.** El cinco de julio de dos mil veintitrés, **LA RECURRENTE** presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente, **EL SAIMEX** ante **EL SUJETO OBLIGADO**, la solicitud de Acceso a la Información pública, a la que se le asignó el número de folio **02448/TOLUCA/IP/2023[[1]](#footnote-1),** mediante la cual requirió lo siguiente:

*“solicito saber nombres y cuantop ganan los adscritos a la dirección de recursos humanos y materiales.” (Sic).*

**MODALIDAD DE ENTREGA:** vía **SAIMEX.**

**2. Turno de requerimiento del Sujeto Obligado.** Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[2]](#footnote-2), el **seis de julio de dos mil veintitrés,** la Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, turnó el requerimiento de información al servidor público habilitado que estimó pertinente, a fin de colmar la solicitud.

**3.** **Respuesta del Sujeto Obligado.** El nueve de agosto de dos mil veintitrés, **EL SUJETO OBLIGADO** dio respuesta a la solicitud, en los términos que a continuación se citan:

*“…*

*En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*En atención a la solicitud con folio 02448/TOLUCA/IP/2023, me permito adjuntar al presente la respuesta correspondiente. Sin más por el momento, reciba un saludo.” (sic)*

Y acompañó a su respuesta el archivo que a continuación se describe:

* ***Respuesta 2448.pdf:*** El cual de su contenido se advierte que se trata de la respuesta formal dirigida al solicitante, en donde le informan que la Dirección General de Administración proporcionó vínculo de consulta de IPOMEX relativo a personal adscrito a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección de Recursos Materiales.

**II. Del Recurso de Revisión**

**1. Presentación.** Inconforme con la respuesta, el diez de agosto de dos mil veintitrés, **LA RECURRENTE** interpuso el Recurso de Revisión en **EL SAIMEX** y se le asignó el número de expediente **04442/INFOEM/IP/RR/2023,** en el que señaló como:

**Acto impugnado:**

*“la respuesta.” (sic)*

**Así como, razones o motivos de inconformidad:**

*“me entregan un documento que no esta firmado por la titular de transparencia, así como me mandan dos ligas sin orientarme a donde lo puedo encontrar, ni me adjuntan el hipervinculo, así como se indica en el oficio, no esta completa la información debido a los registros que se visualizan.” (sic)*

**2. Del turno del Recurso de Revisión.** El mismo día el Recurso de que se trata se envió electrónicamente a este Instituto de Transparencia; por lo que, con fundamento en el artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia Local, se turnó, a través del **SAIMEX**, a la comisionada **Sharon Cristina Morales Martínez**, a efecto de decretar su admisión o desechamiento.

**3. Admisión del Recurso de Revisión.** El **catorce de agosto de dos mil veintitrés**, se acordó la admisión a trámite del Recurso de Revisión que nos ocupa; así como la integración del expediente respectivo, mismo que se puso a disposición de las partes, para que en un plazo máximo de siete días hábiles **LA RECURRENTE** manifestara lo que a su derecho conviniera, a efecto de presentar pruebas o alegatos y, en su caso, **EL SUJETO OBLIGADO** rindiera su correspondiente Informe Justificado; lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley de Transparencia Local.

**4. Manifestaciones e Informe Justificado.** Dentro del término legalmente concedido al **RECURRENTE**, éste no realizó manifestación alguna, ni presentó pruebas o alegatos.

Por su parte, **EL SUJETO OBLIGADO** rindió su Informe Justificado con el archivo *RR4442.pdf* en donde ratifica su respuesta y solicita se confirme la misma.

**5. De la ampliación.** El **dos de octubre de dos mil veintitrés**, se notificó el acuerdo de ampliación de plazo para resolver el presente Recurso de Revisión, previsto en el artículo 181, tercer párrafo de la Ley de Transparencia Local.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de Recursos de Revisión recibidos dentro del primer semestre del año dos mil veintidós, que, en comparación con los recibidos en el año dos mil veintiuno dentro del mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.
3. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución a los Recursos de Revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**6. Cierre de Instrucción.** Por lo que, una vez analizado el estado procesal que guarda el expediente, el **veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro**, la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez** acordó el cierre de instrucción, así como la remisión del mismo, a efecto de ser resuelto, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 fracciones VI y VIII de la Ley de Transparencia Local.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**CONSIDERANDOS**

**PRIMERO.** **Competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2 fracción II, 13, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia Local; y 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Requisitos de procedencia.**

El Recurso de Revisión reúne los requisitos establecidos en los artículos 178, 179 y 180 de la ley de la materia, conforme a lo siguiente:

**a) Forma.** El Recurso de Revisión en estudio fue presentado vía **SAIMEX**, constando **EL SUJETO OBLIGADO**, el nombre del solicitante, el número de folio de respuesta, la fecha en que fue notificada al solicitante, el acto recurrido y los motivos de inconformidad.

**b) Interés.** El Recurso de Revisión fue interpuesto por parte legítima, en atención a que se presentó por **LA RECURRENTE,** quien es la misma persona que formuló la solicitud de acceso a la información pública al **SUJETO OBLIGADO,** pues para ello, es necesario que el particular ingrese al **SAIMEX** mediante la utilización de su clave de usuario y contraseña.

**c) Nombre de LA RECURRENTE.** Se considera importante precisar que conforme al artículo 180, fracción II, último párrafo de la Ley de Transparencia local, cuando las solicitudes se presenten de manera electrónica no es requisito indispensable el proporcionar el nombre, tal como se muestra a continuación:

***“Artículo 180.*** *El Recurso de Revisión contendrá:*

***…***

***II. El nombre del solicitante que recurre*** *o de su representante y, en su caso, …*

***En caso de que el recurso se interponga de manera electrónica no será indispensable que contengan los requisitos establecidos en las fracciones II****, IV, VII y VIII.****”***

*(Énfasis añadido)*

Es así como derivado que el Recurso de Revisión materia del presente asunto, se interpuso de manera electrónica, no es necesario que contenga determinados requisitos, entre ellos, el nombre**;** por lo que, en el presente caso, al haber sido presentado el Recurso de Revisión vía **SAIMEX**, dicho requisito resulta innecesario.

Lo anterior es así, pues el artículo 15 de Ley de Transparencia local prevé que, toda persona tendrá Acceso a la Información sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, de lo que se infiere que para el ejercicio del derecho de Acceso a la Información Pública, el nombre no es un requisito *sine qua non*—sin el cual-indispensable— para que los particulares ejerzan el derecho de Acceso a la Información Pública, pues por el contrario la Ley de la materia prevé en su artículo 155, párrafo segundo la posibilidad de que las solicitudes de información sean anónimas, al utilizar un nombre incompleto o, inclusive un seudónimo.

Aunado a lo anterior, cabe precisar que los artículos 6, Apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, párrafos trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo, fracciones I, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, garantizan el ejercicio del derecho de Acceso a la Información Pública, toda vez que disponen que toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la Información Pública.

Asimismo, se estima que el requisito relativo al nombre de **LA RECURRENTE** no constituye un presupuesto indispensable de procedibilidad de los recursos de revisión, en términos de los artículos 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1 párrafos segundo y tercero, 6 apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, párrafo vigésimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, debido a que el Acceso a la Información Pública es un Derecho Humano que no requiere legitimación en la causa, sino que únicamente basta con que se encuentre legitimado en el procedimiento de Recurso de Revisión, circunstancia que se acredita en las constancias electrónicas del expediente, de las que se desprende que **LA RECURRENTE**  es la misma persona que realizó la solicitud de Acceso a la Información Pública que ahora se impugna.

Es así que, para el estudio de la materia sobre la que se resuelve el presente Recurso de Revisión, resulta intrascendente conocer el nombre de la persona que lo hubiere promovido, en virtud de que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México reconocen la prerrogativa de los individuos para que no resulte necesario la acreditación de un interés o justificar la utilización de la información; por lo que, resulta ocioso realizar dicho análisis, en la inteligencia de que se limitaría el ejercicio de un Derecho Humano, como el Derecho de Acceso a la Información Pública, por una cuestión procedimental.

**d) Oportunidad.** El Recurso de Revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que **LA RECURRENTE** tuvo conocimiento de la respuesta ahora impugnada, como lo prevé el artículo 178 de la Ley de Transparencia local[[3]](#footnote-3).

En efecto, la respuesta a la solicitud de información se notificó el **miércoles** **nueve de agosto de dos mil veintitrés;** en consecuencia, el plazo de quince días hábiles para presentar el recurso de revisión, transcurrió del **jueves diez de agosto al miércoles treinta de agosto de dos mil veintitrés**[[4]](#footnote-4); si el recurso se interpuso el **diez de agosto de dos mil veintitrés**, éste se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el citado precepto legal y, por tanto, se considera interpuesto en tiempo.

**d). Actualización de la procedencia.** Para determinar si la causa que hace valer **LA RECURRENTE** se encuentra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 179 de la Ley de Transparencia local, se revisa el acto impugnado y las razones de inconformidad anunciadas en los antecedentes. Así, advertimos que la acción intentada por el solicitante es ***“La entrega de información incompleta;”*** en términos del citado artículo 179, en su fracción V.

Analizados los requisitos de procedencia, por ser de previo y especial pronunciamiento, se advierte que no se actualiza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento; que impida continuar con el estudio de fondo.

**TERCERO. Marco Normativo General.**

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes[[5]](#footnote-5).

En nuestra entidad, el derecho a la información será garantizado por el Estado, la ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho[[6]](#footnote-6). **Se considera información pública al conjunto de datos que posee cualquier autoridad, obtenidos en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público,** criterio que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación[[7]](#footnote-7).

De acuerdo con la Ley de Transparencia local[[8]](#footnote-8), los Sujetos Obligados se encuentran constreñidos a entregar la información pública solicitada por los particulares que se encuentre en sus archivos o que obre en su posesión, privilegiando en todo momento el principio de máxima publicidad, sin generarla, procesarla, resumirla, ni presentarla conforme al interés del solicitante.

Aunado a lo anterior, el artículo 24 de la Ley en cita, señala que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, siendo el deber de los Sujetos Obligados, garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública.

Es de subrayar que el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un soporte documental en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, de conformidad con el artículo 3, fracción XI[[9]](#footnote-9) de la Ley de Transparencia local.

Así que la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida, o cuando realice su consulta en el lugar que ésta se localice, conforme a lo previsto en los artículos 3 fracción XI, 4, 12 y 24 último párrafo de la Ley de Transparencia local.

Las autoridades locales se encuentran constreñidas a la observancia del **principio de máxima publicidad** y en caso de negarse o limitarse el acceso a la información deberán motivar la clasificación de la información que consideren susceptible de tal actuación, señalando las causas especiales que los llevaron a dicha actuación.

Por tanto, el Derecho de Acceso a la Información Pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en que conste la información pública, toda vez que, los Sujetos Obligados no tienen el deber de generar, poseer o administrar la información pública con el grado de detalle solicitado; esto es, que no tienen el deber de generar un documento *ad hoc* —a modo—, para satisfacer el Derecho de Acceso a la Información Pública, pero si el deber de documentar todos sus actos que realicen derivado del ejercicio de sus atribuciones.

Fijado el marco constitucional y legal, procederemos al análisis**.**

**CUARTO. Del caso en concreto.**

Este Órgano Garante basará el análisis del presente, en el contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico en el SAIMEX, para dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y respetando en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y demás leyes aplicables en la materia; así como, en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 8 y 9 de la Ley de Transparencia local.

1. **De la solicitud de información, respuesta del Sujeto Obligado, inconformidad del particular, manifestaciones e Informe Justificado.**

**¿Qué solicitó LA RECURRENTE?**

* Los nombres
* Salarios de los servidores públicos adscritos a las direcciones de recursos humanos y recursos materiales.

**¿Qué le respondió EL SUJETO OBLIGADO?**

La Titular de la Unidad de Trasparencia refirió que la Dirección de Administración entregó como respuesta los vínculos electrónicos siguientes:

Personal adscrito a la Dirección de Recursos Humanos.

<https://ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/TOLUCA/art_92_viii/5/0/77804.web>

Personal adscrito a la Dirección de Recursos Materiales.

<https://ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/TOLUCA/art_92_viii/5/0/77800.web>

Inconforme, **LA RECURRENTE** interpuso el presente recurso aduciendo “*me entregan un documento que no esta firmado por la titular de transparencia, así como me mandan dos ligas sin orientarme a donde lo puedo encontrar, ni me adjuntan el hipervinculo, así como se indica en el oficio, no esta completa la información debido a los registros que se visualizan.*” (Sic).

**LA RECURRENTE** fue omisa en presentar sus manifestaciones, por su parte, el **SUJETO OBLIGADO** presentó su informe justificado ratificando su respuesta.

Es importante mencionar que se obvia el estudio de la fuente obligacional que constriñe al **SUJETO OBLIGADO** a pronunciarse y contar con lo solicitado por el particular, toda vez que asume contar con la información solicitada.

Aunado a ello, es importante señalar que, la información requerida se encuentra relacionada con las obligaciones comunes de transparencia que los Sujetos Obligados deben cumplir como mínimo, a fin de salvaguardar el Derecho de Acceso a la Información Pública; expresión que toma sustento legal del artículo 92 de la Ley de la materia aplicable en esta Entidad, en específico, conforme a lo estipulado en las fracciones: XI, XII, XXI, mismas que señalan lo siguiente:

**Capítulo II**

**De las Obligaciones de Transparencia Comunes**

***Artículo 92.*** *Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*I a VI …*

***VII. El directorio de todos los servidores públicos,*** *a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base.*

*El directorio deberá incluir, al menos* ***el nombre,*** *cargo o nombramiento oficial asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, datos que deberán señalarse de forma independiente por dependencia y entidad pública de cada sujeto obligado;*

***VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;***

*IX a LII…*

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Transparencia local se advierte:

***Artículo 161.*** *Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días hábiles. La fuente deberá ser precisa y concreta y no debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible.*

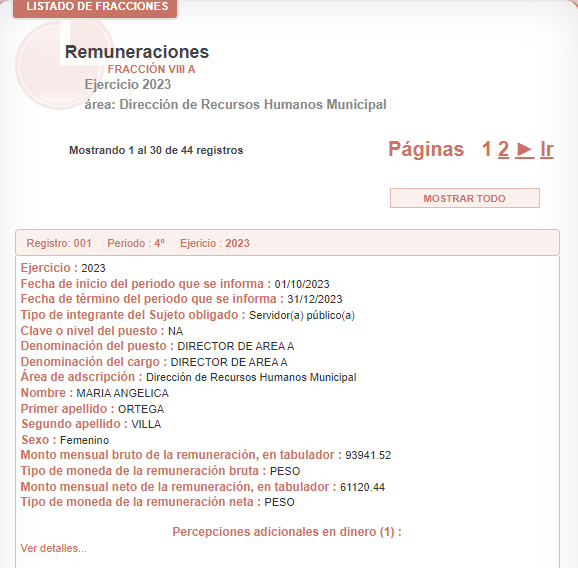
De la disposición normativa anterior se advierte que, si el **SUJETO OBLIGADO** consideró que remitiendo los links colmaría el derecho de acceso a la información, debía cumplir con:

* Informar la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir la información en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
* Proporcional una fuente precisa y concreta que no implique que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible.

En ese sentido si la solicitud se presentó el cinco de julio del dos mil veintitrés, el Plazo de cinco días transcurrió del seis al doce de julio de esa anualidad, por lo que, si en el **SUJETO OBLIGADO** notificó su respuesta el nueve de agosto, es evidente que el plazo señalado fue excedido.

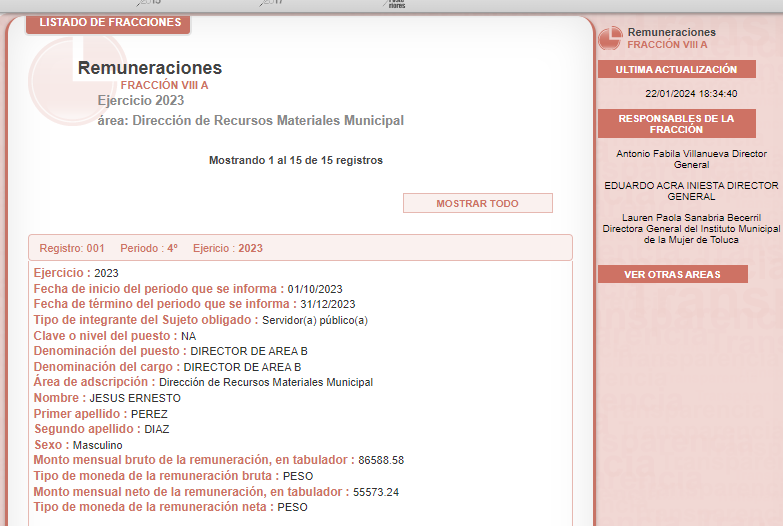
Ahora bien, del análisis a los dos vínculos de IPOMEX para consultar la información, se advierte que de los vínculos acompañados si es posible advertir la información solicitada, pues al ingresar a los vínculos anunciados se observa lo siguiente:

https://ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/TOLUCA/art\_92\_viii/5/0/77804.web



De la imagen que antecede se advierte que el SUEJTO OBLIGADO a través del link proporcionado se encuentra remitiendo a una página de IPOMEX en donde se pueden advertir el nombre y salario del personal adscrito a la Dirección de Recursos Humanos.

https://ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/TOLUCA/art\_92\_viii/5/0/77800.web



De la imagen que antecede se advierte que el SUEJTO OBLIGADO a través del link proporcionado se encuentra remitiendo a una página de IPOMEX en donde se pueden advertir el nombre y salario del personal adscrito a la Dirección de Recursos Materiales.

De las imágenes anteriores, se puede advertir que contrario a lo manifestado por el **RECURRENTE,** los links proporcionados si conducen a la información solicitada.

Es importante señalar que por medio de un hipervínculo una persona puede saltar desde un lugar que se encuentre dentro del mismo documento, o bien para dirigirse a otro documento y también a determinados sitios Web. Un documento será interactivo si cuenta dentro de su estructura con hipervínculos[[10]](#footnote-10). En ese sentido, si la dirección electrónica no es interactiva, es decir, si al dar clic en ella no te lleva a la información referida podemos afirmar que no se trata de un hipervínculo, sino sólo de una dirección que se tendrá que transcribir en su ordenador.

En esa tesitura, si bien el **SUJETO OBLIGADO** no proporcionó en estricto sentido hipervínculos, lo cierto es que, el **RECURRENTE** podía transcribir los links proporcionados y de esa forma ingresar a la información solicitada.

Así, en el caso, como ya ha quedado evidenciado, al transcribir las direcciones proporcionadas por el **SUJETO OBLIGADO** se obtienen los nombres y los salarios de cada uno de los servidores públicos adscritos a las Direcciones de Recursos Humanos y Recursos Materiales.

Por tanto, si bien no se cumple en tiempo con lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Transparencia local, pues la respuesta no fue entregada dentro del plazo previsto, lo cierto es que, los links proporcionados **sí conducen de forma precisa y concreta a la información solicitada**, toda vez que no implican que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible para localizar su información.

Ahora bien, a decir de la Unidad de Transparencia refiere que fue la Dirección General de Administración a través del Servidor Público Habilitado quien se pronunció al respecto de la información solicitada.

Cabe señalar que de conformidad con el Código Reglamentario Municipal de Toluca 2023, la Dirección General de Administración cuenta con las siguientes atribuciones:

***Artículo 3.40.*** *La o el titular de la Dirección General de Administración, tiene las siguientes atribuciones:*

*I. Coordinar y dirigir los sistemas de reclutamiento, selección, contratación e inducción y desarrollo de personal;*

*II. Verificar que se cumplan las disposiciones en materia de trabajo, seguridad e higiene laboral, así como las del Código Reglamentario,* ***respecto de los derechos y obligaciones del personal;***

*III. Autorizar las* ***altas, bajas, cambios****, permisos, licencias, comisiones del personal, entre otras, para su trámite y efectos;*

*IV. Autorizar la elaboración y distribución oportuna de la nómina al personal que labora en el Ayuntamiento, apegándose a la normatividad en la materia y al presupuesto autorizado;*

***Artículo 3.41.*** *La Dirección General de Administración, para el cumplimiento de sus atribuciones, se auxiliará de la* ***Dirección de Recursos Human****os, de la Dirección de Recursos Materiales, de la Dirección de Servicios Generales y de la Dirección de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital.*

*SUBSECCIÓN PRIMERA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS*

***Artículo 3.42. La o el titular de la Dirección de Recursos Humanos cuenta con las siguientes atribuciones:***

*I. Elaborar, operar y mejorar los procedimientos administrativos de control para la selección, reclutamiento, contratación, escalafón, capacitación, retiro, sanción, comisión y desarrollo del personal al servicio del Municipio;*

*II. Vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de trabajo, seguridad, higiene, así como las demás normas aplicables a la institución respecto de los derechos y obligaciones del personal;*

*III. Garantizar que no se soliciten pruebas de no gravidez o VIH como condicionantes para la contratación;*

*IV. Aplicar las disposiciones legales laborales que rigen al personal del Ayuntamiento;*

*V. Registrar las altas, reingresos, bajas, cambios de categoría y adscripción, permisos y licencias por incapacidad, entre otras, del personal, y su correcta aplicación;*

*VI. Coadyuvar con la Tesorería en la elaboración y distribución oportuna de la nómina para el pago al personal que labora en el Ayuntamiento, apegándose al presupuesto autorizado y aplicar los descuentos procedentes; así como en lo relativo a las determinaciones de los impuestos y la emisión de los CFDI correspondientes una vez realizado el pago;*

*VII. Elaborar programas de capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal con el objeto de profesionalizar a los servidores públicos conforme a las necesidades institucionales y a las del mismo personal;*

*VIII. Verificar el cumplimento de las cláusulas establecidas en los convenios sindicales suscritos con el gobierno municipal, así como de las condiciones generales de trabajo del personal sindicalizado; y*

*IX. Las demás que le asignen otros ordenamientos, el presidente municipal y la o el Director General de Administración.*

Atendiendo a las atribuciones de la Dirección de Administración, se considera que la solicitud de información fue atendida por el área correspondiente.

Por otro lado, no se omite comentar que respecto las razones o motivos de inconformidad expresados por **EL RECURRENTE** consistentes en “*…me entregan un documento que no esta firmado por la titular de transparencia...” (sic);* al respecto, es necesario precisar que las respuestas otorgadas mediante **EL SAIMEX**, tienen plena validez sin necesidad de que contengan firma del Servidor Público que la emite o cualquier tipo de sello o membrete de la Dependencia, al ser dicha acción de respuesta un acto administrativo realizado por un Servidor Público en ejercicio de sus funciones de derecho público.

Lo anterior encuentra sustento en el Criterio 7/09 del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que literalmente establece:

***“****Los documentos sin firma o membrete emitidos y/o notificados por las Unidades de Enlace de las dependencias o entidades son válidos en el ámbito de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuando se proporcionan a través del sistema Infomex. La validez de las respuestas de las dependencias y entidades es intrínseca al uso del sistema Infomex, ya que al presentar el particular su solicitud por este medio electrónico, acepta que se le hagan las notificaciones por el mismo sistema, lo que incluye la respuesta. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 68, antepenúltimo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual establece que cuando el particular presente su solicitud de información por medios electrónicos a través del sistema que establezca el Instituto, se entenderá que acepta que las notificaciones, incluyendo la respuesta, le sean efectuadas por dicho sistema. Asimismo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás marco normativo aplicable no establece la obligación de que las dependencias y entidades, al dar respuesta a una solicitud de acceso, deban emitirlas en papel membretado o firmado por servidor público alguno, toda vez que dicha respuesta se entiende emitida y/o notificada por la Unidad de Enlace de la dependencia o entidad a la que el particular remitió su solicitud. Lo anterior, tiene fundamento en el artículo 41 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.****”***

En razón de lo anteriormente expuesto, este Instituto estima que las razones o motivos de inconformidad hechos valer por **EL RECURRENTE** devienen **infundadas** y por tanto, se **CONFIRMA** la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** en términos del presente Considerando.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5, párrafo trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, y fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Resultan **infundadas** las razones o motivos de inconformidad planteadas por **LA RECURRENTE**, en términos del Considerando **CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **CONFIRMA** la respuesta emitida por **el** **Sujeto Obligado,** a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al Recurso de Revisión **04442/INFOEM/IP/RR/2023**, en términos del Considerando**.**

**TERCERO. Notifíquese** la presente resolución mediante Sistema de Acceso a la Información Mexiquense al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado**, para su conocimiento.

**CUARTO.** **Notifíquese** a **La** **Recurrente** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)** y hágase de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

SCMM/AGZ/DEMF/ESS

1. Es importante señalar que, todas las constancias que integran el expediente 04442/INFOEM/IP/RR/2023 que en esta resolución se resuelve obran en electrónico en el SAIMEX, incluyendo la solicitud en análisis — 02448/TOLUCA/IP/2023—. [↑](#footnote-ref-1)
2. En adelante, Ley de Transparencia local o Ley de la materia. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Artículo 178. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta.

   A falta de respuesta del sujeto obligado, dentro de los plazos establecidos en esta Ley, a una solicitud de acceso a la información pública, el recurso podrá ser interpuesto en cualquier momento, acompañado con el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud.

   En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.” [↑](#footnote-ref-3)
4. Sin contemplar en el cómputo los días sábados y domingos, considerados como días inhábiles, en términos del artículo 3, fracción X de la Ley de Transparencia local; y del Calendario Oficial en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios de dos mil veintitrés. [↑](#footnote-ref-4)
5. Artículo 6°, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [↑](#footnote-ref-5)
6. Artículo 5°Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tesis 2a. LXXXVIII/2010, sustentada por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, agosto de 2010, página 463. “INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental” (sic). [↑](#footnote-ref-7)
8. “Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.

   Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.

   Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.” [↑](#footnote-ref-8)
9. “Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

   XI. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;” [↑](#footnote-ref-9)
10. Tomado de: <https://www.solvetic.com/tutoriales/article/143-crear-hipervinculos-en-un-pdf-interactivo-url/> [↑](#footnote-ref-10)